

## SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, seis (6) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

### SENTENCIA

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **BEATRIZ ELENA RUIZ PINEDA**  
: **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y**  
**Demandados** : **CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., ADMINISTRADORA**  
: **COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**  
**Radicado** : **05001 31 05 006 2019 00538 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y** : Seguridad Social –Ineficacia traslado de régimen pensional,  
**Subtemas** pensión vejez-  
**Decisión** : **Revoca** decisión absolutoria  
**Sentencia No** : 34

En la fecha antes anotada el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por las Magistradas **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL, CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO y MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**, como ponente, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado, que se traduce en la siguiente decisión<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, que modificó el trámite en los procesos de la jurisdicción Laboral.

## **ANTECEDENTES**

### **Pretensiones:**

Se solicita se declare la **ineficacia o nulidad de la afiliación** al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), entendiéndose válida en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad, con derecho al reconocimiento de la pensión de vejez en el RPMPD conforme a la Ley 797 de 2003, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación más favorable, entre el de toda la vida laboral o el de los últimos 10 años; se ordene el traslado de las cotizaciones, con sus rendimientos, sin descuento alguno; se condene a COLPENSIONES a recibir los dineros, reconocer y pagar la **pensión de vejez** a partir de la fecha en que acredite los requisitos y de edad y semanas de cotización; costas procesales.

### **Hechos relevantes de la demanda:**

Se afirma, en términos generales, que la demandante nació el día 3 de diciembre de 1962, se afilió al entonces I.S.S. y estando laborando para el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, se trasladó al RAIS a través de PROTECCIÓN S.A. en febrero de 1999; en el año 2003 fue desvinculada de la entidad y posteriormente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ordenó su reintegro, por lo que su vinculación a la citada entidad pública ha sido sin solución de continuidad; hasta el mes de marzo de 2019 había cotizado 1.364 semanas cotizadas al Sistema de Pensiones; expone que los asesores de la AFP no le brindaran la debida información,

clara y suficiente, respecto a las ventajas y desventajas del traslado de régimen pensionales, características de cada régimen, así como, las condiciones para acceder a la pensión de vejez; de acuerdo a proyección pensional suministrada por la AFP, sería menos favorable la mesada pensional en el RAIS, respecto a la que percibiría en el RPMPD.

### **Respuesta a la demanda:**

**COLPENSIONES** mediante apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda y propuso en su defensa las excepciones que denominó imposibilidad de decretar la ineficacia del traslado, falta de legitimación en la causa por pasiva, traslado conforme a derecho, buena fe, imposibilidad de condena en costas, innominada.

**PROTECCIÓN S.A.** mediante apoderada allegó respuesta en forma extemporánea, declarándose como indicio grave en su contra, mediante Auto del 9 de febrero de 2021 (archivo 04).

### **Sentencia de Primera Instancia:**

El **Juzgado Sexto Laboral** del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 28 de octubre de 2022, **absolvió a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra;** se abstuvo de imponer condena en costas.

### **Recurso de Apelación apoderada de la demandante:**

**Solicita se revoque la Sentencia de Primera Instancia y se acojan las pretensiones de la demanda,** afirmando que para la época del traslado al RAIS por parte de la señora Beatriz Elena, la normatividad exigía a la Administradora de Fondos de Pensiones, cumplir con el deber de brindar la debida información, con las características del régimen y consecuencias que implicaba la decisión, ya que, de no conocerlos, se entiende que la información fue inexistente; información que debió brindarse al momento del traslado y no en forma posterior; sin que el formulario suscrito por la demandante en el año 1998 o la reasesoría brindada en el año 2009, sirvan de prueba para el cumplimiento del deber de información, ya que no satisfacen las exigencias señaladas en la norma aplicable y la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia.

### **Alegatos de conclusión:**

Las apoderadas de la demandante y COLPENSIONES, reiteraron argumentos expuestos en el trámite de primera instancia y en el recurso de apelación.

Agotado el trámite procesal correspondiente a este tipo de procesos sin que se aprecie causal alguna de nulidad que invalide la actuación, se procede a resolver el asunto de fondo, previas las siguientes,

## **CONSIDERACIONES**

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de **Apelación**, de conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 15 y 66 A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

### **Conflicto Jurídico:**

**El asunto a dirimir, radica en verificar si es procedente revocar la Sentencia de Primera Instancia, constatándose si produjo efectos la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por PROTECCIÓN S.A. o si hay lugar a declarar su ineficacia, con las consecuencias y análisis de las pretensiones solicitadas en la demanda. Encontrando esta Sala de Decisión Laboral procedente, revocar la decisión de Primera Instancia; por las siguientes razones:**

#### **1. Ineficacia de traslado de régimen pensional:**

La Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, ha sido unánime en indicar que es deber de la Administradora de Fondo de Pensiones, en estos casos, el de informar en debida forma al afiliado; decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales; siendo atribuida al Fondo de Pensiones, no al afiliado, la carga de la prueba, para demostrar que cumplió con dicho deber de información.

Es así como desde la **Sentencia del 9 de septiembre de 2008 Radicado 31989**, reiterada en **Sentencia SL 3496 del 22 de agosto de 2018 Radicado 55013**, se indicó que **la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, ya que la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes**, la posición anterior ha sido reiterada en las Sentencias SL 731 del 2 de marzo de 2020 Radicado 77535 y SL 1688 del 8 de marzo de 2019 Radicado 68838.

En **Sentencia SL5680 de 2021**, reiteró que para la procedencia de la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, no se exige que el usuario cuente con un derecho consolidado, un beneficio transicional o que esté próximo a pensionarse, pues la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado; lo genera como consecuencia, que los fondos privados de pensiones deban trasladar a la administradora del régimen de prima media, el capital ahorrado y los rendimientos financieros, así como los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, por lo que no se transgrede el principio de sostenibilidad financiera.

Por su parte, en Sentencia del 22 de noviembre de 2011 Radicado 33083, se reiteró por la Corte que es un deber de las AFP desde la perspectiva de los artículos 48 y 335 de la Constitución Política prestar de forma *eficiente, eficaz y oportuna* todos los servicios inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, además de que los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de

1994 les establecen obligaciones de carácter especial que las sitúan en el campo de la responsabilidad profesional, las que deben ser cumplidas “...con suma diligencia, con prudencia y pericia...”.

De igual forma, la Alta Corporación en **Sentencia SL373 de 2020, en la que se reitera lo indicado en la SL1688 del 8 de mayo de 2019 Radicado 68838**, señaló en lo relativo al formulario de afiliación que “...la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado...” (En el mismo sentido se pronunció en **SL5595 de 2021 Radicado 87406**).

**En Sentencia SL 12136 del 3 de septiembre de 2014 Radicado 46292**, se indicó que es eficaz cualquier determinación personal sobre traslado de régimen, **cuando existe un consentimiento informado** y que **dicha información comprende no solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, sino además las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión**; en la **SL 17595 del 18 de octubre de 2017 Radicado 46292**, se amplía el concepto hacia la libertad informada, precisando que para que se entienda que la afiliación fue hecha de manera libre y voluntaria, se debe verificar si la respectiva administradora puso en conocimiento del afiliado los riesgos que implicaba el traslado de régimen y a su vez los beneficios que obtendría, es decir, que se demuestre que la correspondiente entidad garantizó una decisión informada, que permita una manifestación de voluntad autónoma y consciente; en concreto indicó “...no es dable argüir que existe una manifestación libre y voluntaria

*cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito...” (Criterio reiterado en **SL5585 de 2021** Radicado 86917).*

Y en **Sentencia SL782 del 14 de marzo de 2018 Radicado 58158**, indicó que no puede afirmarse la existencia de una manifestación libre y voluntaria, cuando la persona desconoce cómo puede incidir esa decisión en su derecho pensional, estando a cargo de la AFP, dar cuenta de que documentaron en forma clara y suficiente, las consecuencias del traslado.

Así las cosas, de la normatividad y jurisprudencia referidas, se tiene que las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, tienen la obligación de brindar toda la información requerida a los potenciales afiliados, respecto de las ventajas y desventajas de su traslado, realizando proyecciones de su posible mesada pensional y los requisitos que debía cumplir para acceder a la pensión de vejez, para con ello tomar una decisión debidamente informada en cuanto a su cambio de régimen; siendo carga de la prueba de dichas Administradoras, demostrar la debida información; ver Sentencias de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia SL 731 del 2 de marzo de 2020 Radicado 77535; SL 373 del 12 de febrero de 2020 Radicado 71211; SL 1688 del 8 de mayo de 2019 Radicado 68838 y la SL4964 del 14 de noviembre de 2018 Radicado 54814.



**En el presente caso tenemos que:**

Se pretende la declaración de ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), verificándose en la prueba documental obrante en el expediente, que la señora Beatriz Elena Ruiz Pineda se afilió al RPMPD a través del I.S.S. el 25 de septiembre de 1981 (fl 16 archivo 02); se trasladó del RPMPD al RAIS a través de PROTECCIÓN S.A. con efectividad a partir del 1º de febrero de 1999 (fls 90 a 92 archivo 03); caso en el cual, la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia antes citada, tiene señalado que **la carga de la prueba es de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y no se puede pretender trasladarla al afiliado**; debiendo demostrar la AFP que cumplió con el deber de brindar la información completa, clara, precisa, transparente, mostrando las ventajas y desventajas del traslado y las condiciones en que podría pensionarse la persona en ambos regímenes, explicándole las **consecuencias de trasladarse al RAIS con las perspectivas pensionales**, especificando la edad exigida para adquirir el derecho, las modalidades, el monto de la prestación, semanas de cotización, capital requerido; debiendo corresponder a una **decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales**. Sin que tenga incidencia si el afiliado tiene o no un derecho consolidado, si tiene o no un beneficio transicional o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado.

Para negar las pretensiones de la demanda, **el Juzgado de Primera Instancia expuso en términos generales**, que la

demandante tomó la decisión de trasladarse al RAIS de manera voluntaria, reafirmando su pertenencia a dicho régimen pensional al permitir el descuento de los aportes y permaneció allí por muchos años. La *a quo* explicó que se aparta de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, pues en su sentir, la declaración de ineficacia de la afiliación lo que hace es exonerar de responsabilidad a las AFP, entidades que se lanzaron de manera irresponsable a captar afiliados, privilegiando su avidez de enriquecimiento y no el derecho a la seguridad de los afiliados, liberándolas de compensar el perjuicio causado; anota que en estos casos, procedería la acción de responsabilidad patrimonial, para resarcir el perjuicio ocasionado al afiliado, para que la AFP reconociera la pensión de vejez, en las condiciones del RPMPD, pretensión que no fue demandada en este caso y que por tanto, no era viable un pronunciamiento de fondo.

Encontrando esta Sala de Decisión Laboral que, opera una inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado; **sin que sea válido atribuirle responsabilidad, por haber suscrito el formulario de vinculación o de reasesoría por parte de PROTECCIÓN S.A., documentos que contienen un formato preimpreso** con la anotación de haber seleccionado dicho régimen pensional en forma libre, voluntaria y sin presiones, pero sin que constituya prueba del consentimiento informado.

En este asunto, **PROTECCIÓN S.A. no allegó prueba de haber cumplido con el deber de información suficiente**, en los términos indicados en la jurisprudencia reseñada inicialmente; pues con la respuesta a la demanda –presentada en forma extemporánea–, se limitó a afirmar que suministró toda la información necesaria

para que la demandante eligiera la AFP y que como prueba de esa decisión libre, suscribió el formulario de vinculación; sin que sea válido afirmarse que existe una manifestación libre y voluntaria, cuando la persona desconoce cómo puede incidir esa decisión en su derecho pensional. **Se observa que en el proceso no existe prueba documentada** –conforme lo exige la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia-, **de haberse entregado o dado a la demandante la debida información**, en forma clara, precisa y suficiente, sobre las consecuencias del traslado de régimen pensional, con las características y condiciones para acceder a la pensión de vejez en cada régimen y por tanto, el incumplimiento de ese deber conlleva a declarar ineficaz la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Así las cosas, **esta Sala de Decisión Laboral encuentra procedente, revocar la decisión de Primera Instancia** y en su lugar, **declarar la INEFICACIA de la afiliación** de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A., entendiéndose que ha permanecido afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad; en consecuencia, **se condenará a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES**, en los términos de Ley, **la totalidad de aportes** por pensión recibidos con motivo de la afiliación de la demandante, con los **rendimientos** financieros, sin descuento alguno; incluyendo los **gastos de administración**, comisiones destinadas a cubrir los **seguros previsionales y aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima**, estos tres últimos conceptos debidamente **indexados**, tal como lo tiene señalado el Órgano de Cierre de la especialidad laboral

en Sentencias como SL1022-2022, SL1017-2022, SL1125-2022.

Al momento de cumplirse lo dispuesto en esta Sentencia, *los conceptos deberán discriminarse con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen*, tal como lo establece el artículo 2.2.2.4.8. del Decreto 1833 de 2016 y lo tiene señalado la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencias SL1637, SL1565, SL1566, SL1651, SL1618, todas del año 2022, entre otras.

Todo lo anterior, dentro del término de **treinta (30) días** siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 692 de 1994.

Se ordenará a COLPENSIONES, recibir los dineros trasladados – y que correspondan conforme a la Ley-, teniendo a la demandante como afiliada en el RPMPD sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral para los fines pensionales y prestacionales a que hubiere lugar.

Conforme a jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencias SL2917 de 2020 Radicado 69794, en la que cita CSJ SL1421 de 2019, **la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible**, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por tanto, los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social.

Los demás medios exceptivos propuestos por las codemandadas, se declaran implícitamente resueltos.

**2. En lo referente a que se condene al reconocimiento de la pensión de vejez en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, en aplicación de la Ley 797 de 2003;** tenemos que:

**Con relación a los asuntos que conoce la Jurisdicción Ordinaria en sus especialidades Laboral y de la Seguridad Social,** el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001 y específicamente en el numeral 4°, modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012<sup>2</sup>, señala que **esta Jurisdicción conoce de:** “...*las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social, que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos...*”. (Negritas fuera del texto).

Por su parte, **la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, conoce entre otros, de los asuntos que versan sobre controversias concernientes a la relación legal y reglamentaria, entre los servidores públicos y el Estado, así como la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una entidad de derecho público<sup>3</sup>.**

De otro lado, según lo establecido en el **artículo 16 del Código General del Proceso, la jurisdicción y la competencia por**

---

<sup>2</sup> Publicada en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012, la modificación rige a partir de su promulgación.

<sup>3</sup> **Administrativo.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

(...)

4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y **la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público...**”. (Negritas fuera de texto).

**los factores subjetivo y funcional son improrrogables,** debiéndose enviar el proceso de inmediato al Juez competente, en los casos en que ésta sea declarada; veamos la norma:

*“... **La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare,** de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y **el proceso se enviará de inmediato al juez competente.** Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo...”. (Negrillas fuera de texto)*

El artículo 29 del Código General del Proceso señala que es prevalente la competencia establecida en consideración a la calidad de las partes.

En este caso, desde la presentación de la demanda la señora Beatriz Elena informó que ha prestado sus servicios sin solución de continuidad, en la entidad pública Hospital Manuel Uribe Ángel del Municipio de Envigado, lo cual se corrobora con las cotizaciones efectuadas al Sistema de Pensiones través de dicho empleador; así mismo, allegó Resolución No 2551 del 18 de diciembre de 2019, por medio de la cual el Gerente de la entidad ordenó el pago de una liquidación en su favor por el periodo 4 de abril de 1994 al 15 de diciembre de 2019, indicando que ocupaba el cargo de Auxiliar Área de la Salud, en carrera administrativa (fl 109 archivo 02).

De acuerdo a lo anterior, se trata de pensión de vejez reclamada por quien ostenta la calidad de empleado público y conforme a lo señalado en la normatividad citada, **no es esta la Jurisdicción competente para decidir de fondo respecto a la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, al**

**tratarse de conflicto relativo a la seguridad social, de un empleado público, regido por relación legal y reglamentaria, cuyo régimen en pensiones está administrado hoy por COLPENSIONES, entidad de derecho público.**

**COSTAS:**

**Se condenará en Costas en ambas instancias a cargo de PROTECCIÓN S.A.**, al haberse revocado la Sentencia de Primera Instancia y en favor de la demandante Beatriz Elena Ruiz Pineda, anotándose que las agencias en derecho de Primera Instancia serán liquidadas por la *a quo*; en Segunda Instancia se fija como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor de la demandante; de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 365, artículo 366 del Código General del Proceso y Acuerdo 10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley,

## RESUELVE

**PRIMERO:** Se **REVOCA** la Sentencia absolutoria de Primera Instancia, de la fecha y procedencia conocidas, que por vía de **Apelación** se revisa; en su lugar, **se DECLARA la INEFICACIA de la afiliación de la demandante BEATRIZ ELENA RUIZ PINEDA al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A.**, entendiéndose que ha permanecido afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad; según lo explicado en la parte considerativa de esta Sentencia.

**SEGUNDO:** Se **CONDENA a PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES**, en los términos de Ley, **la totalidad de aportes** por pensión recibidos con motivo de la afiliación de la demandante, con los **rendimientos** financieros, sin descuento alguno; incluyendo los **gastos de administración**, comisiones destinadas a cubrir los **seguros previsionales y aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima**, debidamente **indexados**; de acuerdo a lo indicado en la parte motiva.

**TERCERO:** **PROTECCIÓN S.A.** deberá cumplir lo ordenado, dentro del término de **treinta (30) días** siguientes a la ejecutoria de esta Sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 692 de 1994. Al momento de cumplirse lo dispuesto en esta Sentencia, entregará la información debidamente discriminada, con sus respectivos valores, junto con el detalle



pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen; conforme quedó explicado.

**CUARTO: Se ORDENA a COLPENSIONES recibir los dineros trasladados** – y que correspondan conforme a la Ley-, teniendo a la demandante BEATRIZ ELENA RUIZ PINEDA como afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, sin solución de continuidad, actualizando su historia laboral para los fines pensionales y prestacionales a que hubiere lugar; según los considerandos.

**QUINTO: Se DECLARA la falta de jurisdicción y competencia funcional respecto a la pretensión de reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la demandante;** según se explicó en la parte motiva.

**SEXTO: Se CONDENA en Costas en ambas instancias a PROTECCIÓN S.A.** y en favor de la demandante **BEATRIZ ELENA RUIZ PINEDA**, las agencias en derecho de Primera Instancia serán liquidadas por el *a quo*; en Segunda Instancia se fija como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente (\$1.160.000) en favor de la demandante. Todo lo anterior según lo explicado en la parte motiva.

**SÉPTIMO:** Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, en el término de un (1) día; se ordena devolver el proceso al Despacho de

origen. En constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron.

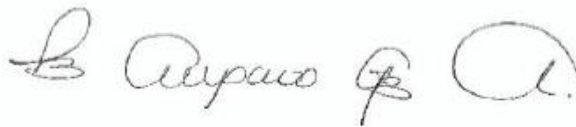
**Las Magistradas,**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO**



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZÁBAL**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SECRETARIA SALA LABORAL  
EDICTO VIRTUAL**

**HACE SABER:**

**Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:**

**Proceso** : Ordinario de Segunda Instancia  
**Demandante** : **BEATRIZ ELENA RUIZ PINEDA**  
**Demandados** : **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**  
**Radicado** : **05001 31 05 006 2019 00538 01**  
**Providencia** : Sentencia  
**Temas y Subtemas** : Seguridad Social –Ineficacia traslado de régimen pensional, pensión vejez-  
**Decisión** : **Revoca** decisión absolutoria  
**Sentencia No** : 34

**FECHA SENTENCIA:** 6 de marzo de 2023

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN** **CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Fijado hoy martes 7 de marzo de 2023 a las 8:00 Am Desfijado hoy martes 7 de marzo de 2023 a las 5:00 Pm

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del termino de fijación del edicto.

**RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS**  
**Secretario**

